

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

El Proyecto sometido a informe supone una profunda reforma del Reglamento General de Circulación especificando la Exposición de Motivos las distintas causas que justifican tal reforma.

En lo que afecta a la aplicación de la legislación de protección de datos de carácter personal cabe únicamente hacer referencia a dos cuestiones que pudieran verse afectadas por aquélla: por una parte, de forma indirecta, la regulación de la obligaciones del conductor, establecida en el artículo 18 del reglamento, modificado por el apartado cuatro del artículo único y, por otra, la regulación de las pruebas de detección de drogas, contenidas en el artículo 28, introducido a su vez por el apartado ocho del citado artículo único.

En cuanto a la primera de las cuestiones mencionadas, el artículo 18.2 a) en su nueva redacción prohíbe a los conductores la utilización con el vehículo en movimiento de pantallas, monitores de televisión, reproductores de imágenes o cualquier tipo de dispositivo similar que disminuya la atención a la conducción, añadiendo que se exceptúa de la prohibición “el uso de monitores que estén a la vista del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de la subida o bajada de pasajeros o para la visión de vehículos con cámara de maniobras, así como la visualización de los dispositivos de navegación”.

Respecto de los dispositivos exceptuados, debe tenerse en cuenta que los mismos podrían considerarse sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, por cuanto podrían implicar el tratamiento de datos de carácter personal de imágenes de personas que suben o bajan del vehículo o matrículas de terceros automóviles. En este punto, debería tenerse en cuenta lo dispuesto en la Instrucción 1/2006 de esta Agencia, de forra que podría ser

exigible el cumplimiento de las previsiones de la misma, en particular en lo relativo a la proporcionalidad e información a los interesados.

En cuanto a la segunda, la realización de las pruebas de detección de drogas y sustancias estimulantes o estupefacientes, del mismo modo que lo sería la detección de alcohol, implicará el tratamiento de datos relacionados con la salud de los conductores, dado que el artículo 5.1 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 define en su apartado g) los datos relacionados con la salud de las personas como “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”.

Debe recordarse en este punto que el apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa, que define los “datos de carácter personal relativos a la salud”, indica que su concepto abarca “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”, pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena salud, enfermo o fallecido y añadiendo que “debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas”.

Por tanto el tratamiento y la cesión de los datos relacionados con el consumo de drogas deberá encontrarse amparado por lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”.

El artículo 28 del reglamento, en la redacción propuesta por el Proyecto sometido a informe señala en su apartado 2 que las pruebas de detección de drogas “consistirán en una prueba salival mediante la utilización de un dispositivo autorizado para ello, y en un posterior análisis toxicológico de una muestra salival en cantidad suficiente”, siendo posible en los supuestos excepcionales establecidos en el precepto la realización de un “reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro al que sea trasladado estimen más adecuados, siendo preferente el análisis de sangre”. Al mismo tiempo, el apartado 3 se refiere a la realización de análisis de contraste, “que consistirán preferentemente en un análisis de sangre, en el centro más próximo que disponga de los medios adecuados para realizar este tipo de pruebas”. En todo caso, el apartado 6 impone al personal sanitario y el de los laboratorios homologados al efecto la obligación de dar cuenta, en todo caso, del resultado de las pruebas “al Jefe de Tráfico de la



provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o municipales indicadas en el apartado anterior”, es decir, competentes en materia de tráfico.

Ello supone el tratamiento por los laboratorios y centros sanitarios de los datos relacionados con la práctica de los análisis o reconocimientos médicos, así como y comunicación al órgano competente en materia de tráfico y seguridad vial, que deberá resultar conforme a las exigencias establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 y, en particular, encontrar la legitimación establecida en el artículo 7.3 de la misma.

Dicha habilitación aparece recogida en el artículo 12 Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 marzo. Así, el apartado 2 del precepto establece que “todos los conductores de vehículos quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Igualmente, quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en esta Ley”.

El artículo 12.3 añade específicamente que las pruebas para la detección de la presencia de drogas en el organismo consistirán “en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente”, si bien se añade que “no obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados”.

Asimismo, conforme al artículo 12.5 “a efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas”.

Finalmente, concluye el segundo párrafo del citado artículo que “el personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos competentes para sancionar en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes”.

De este modo, la recogida de los datos y su comunicación aparecen recogidas expresamente en el Texto Articulado, por lo que ambas serán conformes a la Ley Orgánica 15/1999.

No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 12.4 del Texto Articulado dispone que “El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se establecerán reglamentariamente” y no debe ignorarse que en este caso nos encontramos ante un tratamiento de datos que revisten una especial relevancia, sin perjuicio de la existencia de legitimación legal para que los mismos puedan tener lugar.

Por este motivo deben tenerse particularmente en cuenta las normas de protección de datos en la actividad relacionada con el tratamiento, debiendo valorarse la necesidad de incorporar al Proyecto sometido a informe las cautelas que a continuación se señalarán.

En particular es relevante señalar que la comunicación de los datos a las autoridades competentes en la materia implicará aun tratamiento por las mismas de datos relacionados con la salud, siendo fundamental clarificar que este tratamiento única y exclusivamente debería tener lugar en el marco de la actividad de dicha autoridad que justifique la obtención de los datos de salud; es decir, que los datos únicamente serán tratados, en su caso, para la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador en materia de tráfico o, cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, para su comunicación al órgano jurisdiccional que sea competente para la instrucción de la causa. En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica dispone que “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”.

Asimismo, sería necesario el establecimiento de cautelas que previniesen de la conservación de los datos en los supuestos de análisis que no arrojasen un resultado positivo, dado que la cesión habilitada por el párrafo segundo del artículo 12.5 del Texto Articular, reproducido por el artículo 28.6 del Reglamento en los términos redactados por el Proyecto, prevé una cesión de los resultados de cualesquiera análisis llevados a cabo en el marco de lo

dispuesto en la norma, lo que implica no sólo la transmisión de los datos que pudieran lugar a la apertura de un procedimiento sancionador o la transmisión de los mismos a los órganos del Orden Penal, sino también de todos los datos relacionados con análisis que no hubieran detectado la presencia de drogas o, sustancias estimulantes o estupefacientes. Estos datos no deberían poder ser objeto de tratamiento para ninguna otra finalidad y debería igualmente producirse su cancelación en el menor tiempo posible, conforme impone el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”, de forma que “no serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados”.

Además, debe recordarse que el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 impone el establecimiento sobre el tratamiento de las adecuadas medidas de seguridad, señalando el artículo 81.3 del reglamento que la desarrolla que deberán imponerse en caso de tratamiento de datos relacionados con la salud, como el que aquí nos ocupa, las medidas de seguridad de nivel alto.

Finalmente, resta señalar que en caso de que se proceda a la realización sobre el conductor de los reconocimientos médicos a los que se refiere el artículo 28.2 del Reglamento en la versión propuesta, los datos relacionados con la salud formarían además parte de la historia clínica del mismo, lo que exigirá la aplicación sobre dichos datos de la totalidad de las previsiones establecidas, respecto de la historia clínica, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.